

CONFERENCIAS



fundación para el análisis y los estudios sociales



**‘ECONOMÍA Y MORAL’
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE FAES**

José María Aznar

**Teatro Auditorio Feria de Campo
(Madrid, 26 de abril de 1995)**

Me complace presentar la Memoria de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del año 1994, poniendo de relieve que 1994 ha sido para la Fundación un año de notable fecundidad.

Más de sesenta seminarios y actos públicos sobre las grandes cuestiones de la organización del Estado, de la investigación sociológica, del análisis económico, de las humanidades, del cine, de las artes escénicas y de los problemas medioambientales, representan una labor amplia y sostenida que ha explorado muchos aspectos que son objetivo de atención o de polémica pública en la España de hoy, ofreciendo para todas ellas perspectivas estimulantes y propuestas rigurosas, sin temor a la novedad pero sin perder el contacto con la realidad.

La fundación es un taller de ideas, en el que se diseñan los prototipos de las grandes líneas de acción política y social que, una vez pulimentadas por el bisel del debate crítico, quedan listas para ser materializadas en iniciativas concretas de carácter legislativo o de gobierno. Porque hoy es especialmente necesario que existan centros de elaboración de pensamiento que sienten las bases doctrinales para una nueva etapa de la vida española.

El Gobierno ensimismado en la poco creativa tarea de sobrevivir, parece haber perdido la capacidad de alumbrar ideas y proyectos consistentes. Voces muy autorizadas y nada sospechosas de parcialidad han afirmado recientemente que la política inercial del Gobierno ha hecho del año pasado un año perdido, en que los problemas que aquejan a la sociedad española se han agudizado hasta cubrir nuestro horizonte con los tintes más sombríos.

El Gobierno, en efecto, no ha acometido con la necesaria decisión ninguna de las grandes tareas pendientes que los españoles contemplan con creciente preocupación. Las reformas estructurales del sistema económico, el combate contra la corrupción, la recuperación del equilibrio institucional, la culminación estable del proceso autonómico, la neutralización del terrorismo, todo sigue sobre la mesa de quien preside el Consejo de ministros.

Hoy, al hacer balance de un año de trabajo intenso, por lo que felicito a quienes lo han hecho posible, quisiera centrar mi intervención en dos ejes básicos que desde nuestra óptica han de impregnar y guiar a la sociedad española, tanto en el dominio público como en el privado, a lo largo de la próxima década. Me refiero a la austeridad y a la cohesión nacional.

Austeridad no significa pobreza o escasez, sino todo lo contrario. Cuando los Gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas. Cuando los Gobierno, como han hecho constantemente el Gobierno socialista y sus aliados, despilfarran para crear y mantener clientelas electorales que sustenten su hegemonía, las sociedades se debilitan y se agostan, perdiendo dinamismo e ilusión.

A través de sus aparatos de propaganda, pagados por el contribuyente, el socialismo ha conseguido establecer la falta especie de que el endeudamiento y el déficit son necesarios para atender a los más desprotegidos y necesitados y para mantener unos niveles dignos en los servicios públicos básicos. Nada más alejado de la verdad.

Basta tener presente que mientras el gasto en pensiones ha crecido entre 1982 y 1993 dos puntos sobre el PIB, el consumo público –el consumo, no la inversión- se ha incrementado en cuatro puntos; es decir, se ha incrementado el doble. Sumando todas las prestaciones sociales, pensiones, desempleo, invalidez, PER y demás, su incremento en el período mencionado ha estado un billón de pesetas por debajo del crecimiento del gasto generado por la burocracia pública.

En otras palabras, el déficit y sus corolarios –el endeudamiento y la inflación- han sido la consecuencia inevitable de una fijación errónea y pertinaz de prioridades: la conversación del poder por encima del interés general; el disfrute de las ventajas derivadas del ejercicio del gobierno por delante de la eficacia de la gestión; la ostentación antes que los resultados tangibles; el espectáculo que proporciona votos con preferencia al trabajo anónimo que crea riqueza; la megalomanía como sucedáneo de la auténtica grandeza del servicio a las responsabilidades de Estado; y planeando sobre todo ello, un enfoque tan equivocado como tosco: el de considerar que gastar equivale a ganar prestigio y que cuanto más se infla el presupuesto, más meritorio es el desempeño de la administración pública.

Siempre he abrigado la sospecha de que el llamado socialismo democrático español, además de un notorio error intelectual, propende a ese comportamiento irritante del nuevo rico que despliega su fortuna de manera incontinente.

La peculiar circunstancia de que el dinero derrochado no es suyo, sino de todos, hace todavía más inadmisibles la ostentación.

Frente a la estrategia del miedo, hay que llevar al ánimo de los españoles que la única garantía de mantener una protección social adecuada para todos es la contención del gasto público corriente, y que, contrariamente al tópico al uso, el mayor peligro para las pensiones no radica en el envejecimiento de la población o en las políticas de prudencia presupuestaria propugnadas por el Partido Popular, sino en el socialismo, que al impedir el ahorro, la inversión y la creación de empleo seca las fuentes que han de alimentar la solidaridad entre generaciones.

Para nosotros, el sistema de protección social es un deber moral, para el Gobierno socialista parece ser antes un mecanismo electoral. En nuestro esquema conceptual, es la propia sociedad, aliviada de trabas regulatorias y fiscales, la que ha de producir los recursos necesarios para proporcionar la solidaridad real y sostenible. La visión socialista es distinta. Las prestaciones sociales son, en su planteamiento, instrumentos de búsqueda del apoyo electoral. Por eso su satisfacción inmediata es prioritaria frente a cualquier otra consideración o cualquier otro riesgo, incluso el más grave, que es el de llevar a la quiebra a todo el sistema en el medio plazo. Estremece pensar que hemos puesto el fruto de nuestro quehacer colectivo en manos de quienes ni siquiera son capaces de conseguir que los monopolios obtengan beneficios.

Hay indicadores económicos que son también indicadores morales. El endeudamiento, el déficit y la inflación no sólo constituyen las marcas de calidad de una economía. Son también signos del vigor ético de una política, de la calidad de su sistema de valores, de su capacidad de colocar a la sociedad en condición de enfrentarse a sus competidores, de tener confianza en sí misma y en su futuro.

No es casual que en el programa de gobierno que he propuesta a los españoles, la responsabilidad presupuestaria quede adscrita directamente a la Presidencia. Después de doce años de despilfarro, deseo tener el control directo del origen de nuestras peores dificultades; deseo actuar personalmente sobre el núcleo duro de la enfermedad que nos está consumiendo; quiero comprometerme, sin paliativos, ante el país con un propósito que reitero tan firme como ineludible: devolver a los ciudadanos el control de sus vidas y de sus patrimonios; confiar en ellos, en su capacidad para decidir sin tutelajes cómo quieren disponer del fruto de su esfuerzo y de su trabajo.

Nos hemos impuesto la obligación de salvar la sociedad del bienestar de la ruina a la que el socialismo la condena.

Cuando en el libro primero de su *Utopía*, Tomás Moro aconseja al gobernante que ‘viva honradamente de lo suyo, ajustando sus gastos a sus ingresos’, va más allá de enunciar una recomendación tan razonable como elemental, que la inmensa mayoría de familias o de pequeños empresarios o de trabajadores autónomos aplican cotidianamente.

Lo que el gran pensador y moralista inglés nos recuerda es un principio ético fundamental, que los sucesivos Gobiernos de Felipe González y sus aliados han vulnerado sistemáticamente; a saber: que cuando se administra el dinero de otros hay que ser todavía más escrupuloso que cuando se maneja el propio.

España necesita y exige políticas de austeridad que el socialismo español contemporáneo no se las puede dar. En noviembre de 1994 el ministro de Economía y Hacienda anunció con lúgubre solemnidad, un drástico plan de control del gasto para 1995. Revisión mensual por capítulos para cada Departamento; vigilancia rigurosa del Inem y del Insalud; estrecho marcaje de la Seguridad Social; llamada al orden a las Comunidades Autónomas a las que se llega a amenazar con el bloqueo de la parque que les corresponde de los Fondos de cohesión europeos si no frenan su propio déficit y no moderan su endeudamiento. El país asistió conmovido y esperanzado a tan desgarrador acto de contrición.

Ha transcurrido un trimestre del que tenía que ser el año de la bonanza recuperada y del engorde de las vacas enflaquecidas durante el trienio 90-93, y ya sabemos en qué han quedado los buenos propósitos del Gobierno, acogidos con tan circunspecta complacencia como aparente credulidad por sus socios. Un desequilibrio de caja acumulado superior en un 26% al del primer trimestre de 1994, unos tipos de interés al alza, una diferencia entre las importaciones y exportaciones un 50% por encima de la del año pasado y una inflación interanual que rebasa el 5%.

En resumen, todos los objetivos anuales pulverizados y el Gobierno que continúa dando tumbos agarrado con una mano a la farola del poder y con la otra a la botella del déficit.

Todo ello como el mejor aval de los recientes anuncios de que el presupuesto de 1996, ese sí, va a ser el presupuesto austero que las circunstancias requieren.

De los muchos daños infligidos por González y sus sucesivos Gobiernos a la sociedad española, quizá el peor sea haberla empujado a vivir en la falsa apariencia de una prosperidad y una euforia que no eran tales, saldadas con la humillación de las cuatro devaluaciones o la tristeza de un millón de hogares viviendo únicamente del subsidio. El daño también de tentarla con los juegos malabares del dinero transmutado en mercancías, olvidando la producción competitiva de mercancías para ganar honradamente el dinero.

Los socialistas no han entendido que la Unión Europea no es una confederación socialdemócrata o un decorado para que nuestros gobernantes se fotografíen junto a los grandes de la Tierra, sino un club muy selectivo en el que rigen normas estrictas de rigor presupuestario, aumento acelerado del conocimiento, innovación tecnológica permanente, optimización rigurosa de los recursos y competencia industrial y comercial feroz.

Han pretendido, en su mezcla de ingenuidad doctrinaria y de papanatismo, que bastaba con ser socio de una institución seria y prestigiosa para vivir gratuita y muellemente de esa solera y de esa influencia.

La dura realidad les ha demostrado, a costa de todos los españoles, que el camino de la convergencia implica el madrugón, el esfuerzo y la superación. Cuando se solicita a los empresarios que reinviertan beneficios o a los asalariados que moderen sus pretensiones retributivas, se hace una petición legítima en abstracto, porque resulta irrefutable que una subida de nueve puntos del poder adquisitivo de los salarios, funcionarios y agricultores aparte, en el trienio 90-93, coincidiendo con la peor recesión que ha experimentado la economía española en los últimos treinta años, no parece un paradigma de racionalidad ni de prudencia.

Sin embargo, cuando esta llamada a la morigeración la hace un presidente de Gobierno que incumple invariablemente uno tras otro sus propios planes de convergencia, que trufa los presupuestos de artificios contables y duplica el endeudamiento público en términos de PIB durante su mandato, lo lógico es que empresarios y asalariados, mirándose en tan edificante modelo, practiquen el perentorio arte del 'sálvese quien pueda'-

Hay que decir, con serenidad, que la presente situación es insostenible; que los tres reajustes presupuestarios en un trimestre que el Gobierno se ha visto obligado a realizar no son un gesto de responsabilidad sino el manoteo desesperado del náufrago, y que en 1999, si no se adoptan de inmediato el conjunto de medidas coherentes y enérgicas que hemos propuesto para recuperar la capacidad de ahorro, invertir y crear empleo, seremos relegados a la periferia de la Unión Europea, consagrando un fracaso histórico cuyas consecuencias se prolongarán durante Dios sabe cuánto.

Nuestro programa es conocido, nuestros equipos están a punto. Nuestra denostada prisa por asumir la responsabilidad del gobierno es la señal de aviso que nuestra leal preocupación por España nos anima a lanzar. Nos asiste la convicción de que la impaciencia de los españoles es superior a la nuestra.

Pero existe un obstáculo que impide que el ciclo socialista, que ha llegado a su fin, se cierre definitivamente permitiendo que el país libere las energías positivas que todavía le quedan después de doce años de intervencionismo esterilizante y de relativismo moral debilitador. Esta barrera entre el desánimo y la confianza, ha sido calificada paradójicamente por aquellos que la han levantado como 'contribución a la gobernabilidad y a la recuperación'.

Digo paradójicamente porque no es fácil argumentar con la cara alta que la subida de los tipos de interés, un esfuerzo fiscal agobiante, el kilovatio-hora a precios astronómicos, unos costes laborales no competitivos o los recortes en inversión pública mientras el gasto consultivo sigue desatado, sea beneficioso para nadie.

Los problemas no desaparecen por mirar hacia otro lado y más vale decir la verdad, sobre todo cuando se quiere apelar a la respuesta solidaria de los ciudadanos, de todos, sin la que no será posible enderezar la situación.

Por eso quiero referirme a continuación al segundo eje conductor que he mencionado al principio de mi intervención, es decir, a la necesidad de fortalecer la cohesión nacional en estos momentos en que los peligros se multiplican y las dificultades se acumulan.

Hemos de insistir en la necesidad de fortalecer una voluntad de cohesión nacional, que enfatice lo mucho que une a los españoles y encauce por caminos de colaboración y de respeto mutuo aquello que pudiera dividirlos, una cohesión nacional que nos conduzca a entender nuestras diferencias como aportaciones vivificadoras y no como obsesiones enfermizas.

La Constitución no configura a España como un Estado plurinacional, España es una nación plural; plural y diversa en su cultura, en sus lenguas y en sus territorios, y esa pluralidad, que es una riqueza que hay que preservar y cultivar, lo es también en el seno de cada Comunidad, porque sería conceptualmente contradictorio y moralmente inadmisibles predicar el valor de la pluralidad para el conjunto y negarlo en el seno de alguna de sus partes.

La persistente referencia a la plurinacionalidad del Estado es una descripción inadecuada de la realidad española, inadecuada en términos constitucionales, afectivos e históricos. La existencia y la consistencia de España como gran nación europea es un legado de los siglos que la Constitución de 1978 se limita a reconocer y actualizar de forma inequívoca.

Ésta no es para nosotros una cuestión menor y su clarificación la considero imprescindible en una época en que la ambigüedad es esgrimida como arma preferente por los que niegan la condición nacional del conjunto español.

También quiero afirmar, en estos momentos y con toda nitidez, que el Partido Popular no es un partido nacionalista español porque no considera la identidad nacional como el valor supremo al que todos los demás han de supeditarse, ni desea imponer la homogeneidad cultural y lingüística en el interior de las fronteras de España.

Para nosotros, la nación española, marco de pluralidad y de libertad, ha de ser entendida no como una imposición o un dogma, sino como un proyecto y una oferta que admite distintas formulaciones concretas, pero cuyos rasgos esenciales están trazados por la historia y recogidos en la Constitución, que establece las bases conceptuales y las reglas de convivencia que nos hemos dado y que todos hemos de acatar y respetar.

Sólo la consolidación de una amplia y fraternal concordia nacional, que aglutine a todos los españoles, será la mejor garantía del pleno ejercicio de nuestra pluralidad, potenciando las ventajas que toda diversidad comporta y aplacando las amenazas que siempre encierra la armonización de lo complejo.

Austeridad y cohesión nacional pues, como dos vectores que orienten nuestra inminente tarea de gobierno en este azaroso fin de siglo. Y si existe una confirmación segura de que unas determinadas líneas de fuerza son las apropiadas, es un reconocimiento por parte de personas y sectores alejados ideológica y políticamente.

Así, aunque la cita pueda sorprender en un auditorio liberal, quiero recordar unas atinadas consideraciones de una de las más destacadas figuras del socialismo europeo de nuestros días. Advierto, eso sí, que si lo utilizo como referencia es por dos motivos, el primero porque se ha retirado de la política, marcando una pauta que algunos correligionarios suyos deberían considerar seriamente, y segundo, porque siempre practicó en sus actuaciones públicas una escrupuloso honradez.

Jacques Delors, pues del ex presidente de la Comisión Europea se trata, pronunció a mediados del pasado mes de diciembre unas palabras lúcidas y premonitorias. 'No es posible la reforma del Estado del bienestar sin factura y sin fractura'. Efectivamente, esa reforma tan ineludible como urgente no se puede llevar a cabo desde una perspectiva socialista sin un alto coste económico y agrias tensiones sociales. Pero falta un detalle esencial omitido por Delors. Esa abultada y amedrentadora carga material y de conflicto son las secuelas del socialismo.

La factura se puede pagar en plazos razonables y la fractura se puede evitar si renunciando a los postulados más queridos de la socialdemocracia y resistiendo a las pulsiones centrífugas de los particularismos reduccionistas, nos adentramos intrépida y serenamente en las aguas procelosas pero tonificantes de la libertad.

Si entendemos que una cosa es la financiación de los servicios públicos, y de la protección social, y otra su prestación y su gestión; si aceptamos que una sociedad no puede quedar al albur sin límites de la regla de la mayoría y que ha de ser protegida de sí misma por un sistema de valores trascendentes reconocidos por todos, o por casi todos, que se sitúe por encima de las fluctuaciones temperamentales y episódicas de la opinión coyuntural.

Si elevamos los instintos a sentimientos y ennoblecemos los sentimientos a la razón; si reconocemos que el esfuerzo, la autoexigencia, los comportamientos ordenados, la recompensa al mérito, el cultivo de la excelencia y el imperio de la ley son indispensables para el bienestar y el progreso generales; si, en fin, no dejamos permanentemente para mañana el pago de las facturas y no reducimos en falso las fracturas con el entablillado frágil de la cesión pusilánime, España, esa España antigua, mediterránea, atlántica, europea, pluricultural, multilingüe, generosa y abierta, se henchirá de esperanza y desbordará de vitalidad y de nobles ambiciones irrumpiendo en el siglo XXI con el paso seguro que conduce al éxito.

Un éxito que los españoles merecen y al que hemos consagrado, humilde pero irrevocablemente nuestras vidas.

La memoria que hoy presentamos, como la del año pasado, son una muestra de que las cartas de navegación están preparadas. También lo está nuestro ánimo para hacernos cargo del timón de la nave.